



## RESOLUCIÓN No. RH- 0133 19 ENE. 2022

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

### EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

En ejercicio de sus facultades legales estatutarias y en especial las conferidas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, delegadas por el Director Ejecutivo de Administración Judicial mediante Resolución 1019 del 7 de abril de 2021, y

### CONSIDERANDO

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante la Resolución DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, determinó: *“ORDENESE el reintegro de la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$28.643.187,00), por parte de SURA EPS, identificada con el NIT. No. 800088702, a través de su representante legal o quien haga sus veces (...)”*.

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali motivó dicha decisión bajo las siguientes consideraciones:

- Que con fundamento en el informe a Auditoría UA16-278 y la Circular DEAJC16-79 del 28 de septiembre de 2016 y, una vez depurado el inventario de las incapacidades pendiente por cobrar, reconocer y pagar por parte de las EPS, estableció la deuda a cargo de la EPS SURA por concepto de las incapacidades y licencias de maternidad y paternidad por el período comprendido noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019;
- Que en uso del derecho de recobro de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 24 del Decreto 4023 de 2011 y dentro de las facultades otorgadas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, realizó los trámites ante EPS SURA, en tal sentido se emitieron sendas comunicaciones a EPS SURA mediante las cuales hizo el recobro de las incapacidades, fol. 3 y 4.
- Que pese a los requerimientos efectuados está pendiente el pago \$ 28.643.187 a la fecha de expedición de la resolución de recobro.

Que el anterior acto administrativo fue notificado a través de correo electrónico el 4 de octubre de 2021.

Que dentro del término legal, por intermedio del representante legal judicial, doctor Gustavo Alberto Herrera Avila identificado con cédula de ciudadanía 19.395.114 de Bogotá y tarjeta profesional n° 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de escrito interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, y solicita: *“Revoque y reponga en su totalidad la Resolución citada por no contar con la competencia para emitir este tipo de decisiones, y por no existir fundamentos suficientes desde el punto de vista financiero, jurídico y fáctico para tales efectos, por estar en manifiesta oposición a la Constitución Política y a la ley, por no estar conforme al interés público o social y porque con el mismo se está causando un agravio injustificado a la persona que represento.”*; fundamenta su inconformidad en que:

- Falsa motivación y falta de competencia –Violación de la Ley sustancial. Refiere que los actos administrativos que contengan decisiones a particulares deben motivarse y que en el caso de la resolución impugnada no se hace mención de la fecha de radicación del recobro de las incapacidades conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Decreto 4023 de 2011, por ende, no hay evidencia de haberse surtido dicho trámite. De igual forma, aduce que el Director Seccional de Administración Judicial de Cali en virtud del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 es un administrador y que la norma no dispone expresamente que tiene la facultad para ordenar el reintegro de recursos de prestaciones económicas.
- Integración ilegal del acto administrativo. Argumenta que el acto administrativo “es contrario a la Constitución Política y a la Ley 100 de 1993, plantear presuntos compromisos o deberes que no son obligaciones, que no se tienen discriminados, a favor de entidades que no son las competentes para solicitar el recaudo de dineros de la Seguridad Social por vía de acto administrativo”;
- Inexistencia de fuente sustancial de obligaciones económicas. Indica que no es una verdad probada, que si existe una consideración en cuento a diferencias de mayor dinero pagado, se debió a recurrir a una solicitud y confrontación financiera-

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, a través de la Resolución DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021 confirma la decisión contenida en el acto administrativo impugnado y concedió la apelación.

Que la decisión tomada por la Dirección Seccional de Administración Judicial en el recurso de reposición y la fundamenta:

- En el análisis de los artículos 206 de la Ley 100 de 1993, 24 del Decreto 4023 de 2011, 121 del Decreto – Ley 019 de 2012, normativa que regula el trámite para el recobro de los auxilios económicos derivado de las incapacidades o licencias otorgadas por la EPS;
- Indica el sustento legal sobre la competencia que le tienen a las entidades públicas para efectuar el cobro de los actos administrativos contentivos de obligaciones claras, expresas y exigibles, a través del procedimiento de cobro coactivo, acorde a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 1066 de 2006, artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 y el Reglamento de recaudo de cartera de la Rama Judicial;
- Indica que al desatar el recurso procedió a una nueva revisión y depuración de las cuentas por cobrar, conforme a la información que reposa en la seccional y el reporte de Tesorería, sin encontrar novedad alguna que permitiera modificar la decisión inicial.

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali mediante escrito DESAJCLO21-4888 del 21 de diciembre de 2021 trasladado por el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales –SIGOBius, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para resolver en la alzada.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez estudiado el expediente a la luz de la normatividad jurídica, en especial lo señalado en las Leyes 6 de 1992, 100 de 1993, 270 de 1996, 1066 de 2006, 1437 de 2011 y 1438 de

2011; el Decreto Ley 019 de 2012; los Decretos 4023 de 2011, 780 de 2016 y 1333 de 2018; y la Circular Externa 026 del 26 de noviembre de 2015 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y analizados los argumentos aportados por la impugnante y la primera instancia, este despacho se permite señalar:

En la Rama Judicial la ordenación del gasto y la función pagadora se encuentran desconcentradas en virtud de la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Es así como, el recobro de las prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral, como la que nos ocupa, le corresponde en primera instancia a la seccional de Cali, en aras de salvaguardar sus derechos al debido proceso, el de contradicción y el principio de la doble instancia.

En tal sentido, para efectos de resolver el recurso interpuesto contra la Resolución DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, se procedió a requerir a la Seccional de Administración Judicial de Cali para que remitieran las copias de piezas documentales necesarias para desatar en la alzada el presente asunto, tales como la relación depurada de las incapacidades y que se indicará si a la fecha la EPS realizó algún pago con posterioridad a la emisión del recurso de reposición.

Frente a la respuesta, la Coordinadora de Talento Humano de la citada Seccional remitió vía correo electrónico del 14 de enero de 2022, la información requerida, la cual será objeto de análisis más adelante.

Como presupuesto previo, es pertinente hacer mención que el auxilio por incapacidad se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, a sus afiliados cotizantes, por todo el tiempo que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual, conforme a lo preceptuado en los artículos 18 del Decreto-Ley 3135 de 1968, 206 de la Ley 100 de 1993 y 2.2.5.5.13 del Decreto 1083 de 2015, el último precepto legal a letra reza:

***“Artículo 2.2.5.5.13 Prestaciones económicas derivadas de las licencias por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad. Durante la licencia por enfermedad general o profesional, maternidad o paternidad el empleado tiene derecho a las prestaciones económicas señaladas en la normativa que las regula, las cuales estarán a cargo de la entidad de seguridad social competente.***

***Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se remunerará con el 100% del salario que perciba el servidor. A partir del tercer día la licencia por enfermedad genera vacancia temporal en el empleo y se remunerará de conformidad con las normas de Seguridad Social en Salud”*** (Subraya propia).

Se resalta de la norma transcrita que, a partir del tercer día el pago del auxilio económico por enfermedad de origen común, se realiza a razón de las dos terceras partes (66.66%) por los primeros noventa días y la mitad por los otros noventa y **que dicha prestación económica debe ser reconocida por la EPS a la cual se encuentra afiliado el servidor judicial al momento de otorgarle la incapacidad.**

Respecto del procedimiento para el reconocimiento de las incapacidades, el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que el empleador es el encargado de adelantar de manera directa ante las EPS.

A su vez, el artículo 2.2.3.1. del Decreto 780 del 2016 que compiló lo normado por el Decreto 4023 de 2011 el cual prevé que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deberán efectuar los reintegros de las prestaciones económicas por concepto de incapacidades y licencias de maternidad y de paternidad a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS.

En el mismo sentido, el artículo 3 del Decreto 1333 de 2018 a letra reza:

*“Sustitúyase el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, así:  
(...)”*

**PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES**

*Artículo 2.2.3.1.1. Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo los aportantes y trabajadores independientes no podrán deducir de las cotizaciones en salud los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.*

*El pago de estas prestaciones económicas al aportante será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante”.*

En aplicación a la norma transcrita acorde con la previsión contenida en el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, el cual establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las EPS el reembolso del pago de las prestaciones económicas.

Entonces, es claro que la Dirección Seccional de Administración Judicial está facultada para adelantar el cobro de las incapacidades que canceló por nómina a los servidores judiciales que allegaron los certificados médicos que les otorgaba una incapacidad, licencia de maternidad o paternidad, y que se encontraban o están afiliados a la EPS SURA S.A, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y demás concordantes, normas sobre las cuales se encuentra el soporte legal para expedir el acto administrativo de recobro, con lo que se desvirtúa a todas luces el argumento de la falsa motivación.

Frente a la competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales para efectuar el cobro por el procedimiento de cobro coactivo, los artículos 112 y 136 de la Ley 6° de 1992 establecen que las entidades públicas del orden nacional y en particular la **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, están facultadas para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor y el de la Nación.

Sobre los créditos exigibles, se precisa resaltar, tal y como lo expreso en primera instancia la seccional, la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone, sobre el deber que les asiste a las entidades públicas para recaudar las obligaciones creadas a su favor, **con soporte en documentos que presten mérito ejecutivo**, estos son, en los que conste la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.

Conforme a lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011<sup>1</sup>, las resoluciones que ordenen el pago, independiente del origen de la obligación, siempre y cuando se encuentre ejecutoriadas son exigibles por el procedimiento administrativo de cobro coactivo y gozan de presunción de legalidad mientras la jurisdicción Contenciosa Administrativa no se hubiere pronunciado al respecto<sup>2</sup>.

Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, dispuso:

*"La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. **El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz.** De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.*

*"(...) el acto administrativo tiene carácter ejecutivo, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir." (negritas fuera de texto)*

De lo anterior, se concluye que los actos administrativos contentivos de obligaciones a favor del Nación – Rama Judicial son exigibles a partir de su notificación al deudor y agotado el trámite en vía administrativa; vencido el término otorgado para el pago sin que se hubiere realizado, se traslada a la dependencia de cobro coactivo con el fin de hacer efectivo el derecho que en ellos se consagra, tal como lo dispone la Resolución 2041 de 20 de agosto de 2020 emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno para el Recaudo de Cartera.

El artículo 4 del precitado Reglamento Interno para el Recaudo de Cartera a favor de la Nación – Rama Judicial, señala:

*"Artículo 4º. Competencia. El Director Ejecutivo de Administración Judicial en uso de las facultades atribuidas en la Ley 1066 de 2006, **otorgará poder a los abogados de las dependencias de cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de sus Direcciones Seccionales**, con el fin de ejercer la jurisdicción coactiva.*

*La competencia funcional y territorial para adelantar los procesos de cobro coactivo de las multas y sanciones dinerarias impuestas a favor de la Nación- Rama Judicial, se encuentra determinada conforme a las siguientes reglas:*

<sup>1</sup> "Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley"

<sup>2</sup> Artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



- *Competencia de cobro de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:*
  - a. *Contenidas en sus propios actos administrativos, independientemente del origen de la obligación (incumplimiento contractual, recobro de incapacidades, reintegros por concepto de mayores valores pagados por nómina, etc.).*  
(...)
- *Competencia de cobro de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial:*
  - a. *Contenidas en sus propios actos administrativos, independientemente del origen de la obligación (incumplimiento contractual, recobro de incapacidades, reintegros por concepto de mayores valores pagados por nómina, etc.). (...)* (negrillas fuera de texto)

Adicional a lo anterior, el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 establece:

*“Artículo 103. Director Seccional de la Rama Judicial. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:*

- 1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.*
- 2. **Administrar los bienes** y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.*
- 3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.*  
(...). (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De otra parte, la Circular Externa 026 del 26 de noviembre de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispone:

*“... aquellos recursos derivados de las incapacidades que las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud y de Riesgos Profesionales reconocen y que deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro nacional toda vez que se trata de dineros que pertenecen a la Nación...”*  
(Subrayas fuera de texto).

Por las anteriores razones, le asiste a la Rama Judicial, como empleador cotizante y de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas legales antes transcritas, el deber de recobrar a EPS SURA S.A. las prestaciones económicas que son para este caso concreto: incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, que efectuó sin ser de su cargo, para que así, no haya apropiación de recursos para la salud sin justa causa.

Como se ha expuesto, la entidad adoptó como procedimiento idóneo para obtener el reintegro de estas prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud acudir al cobro por vía coactiva, cuando no se obtenga en el trámite administrativo y cobro persuasivo, en razón a que los dineros a recobrar son de carácter público, máxime cuando están dirigidos a preservar y cuidar los dineros públicos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Adicional, que como se dijo en precedencia, **el acto administrativo que ordena el recobro una vez ejecutoriado y en firme constituye un título ejecutivo, goza de presunción de legalidad y principio de obligatoriedad**, lo cual constituye razón legal suficiente para rechazar los argumentos que sustentan el recurso contra la resolución impugnada.

Del análisis de los documentos que hacen parte del cuaderno administrativo del expediente objeto de pronunciamiento, aportados por la Seccional de Cali, se evidencia que se adelantaron ante EPS SURA S.A., los trámites administrativos necesarios para el reconocimiento de las incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 2943 de 2013, artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1333 de 2018, cuyo resultado ha sido desfavorable. Ante esta situación, la Seccional de Cali emitió la resolución impugnada, documento que contiene las incapacidades recobradas, el periodo al que corresponde y los afiliados a los que les fueron otorgados.

De lo anterior, se desprende que al haberse surtido el trámite administrativo del recobro de las incapacidades y comunicado los oficios a la EPS, dicha entidad es conocedora de las obligaciones que por ley debe cumplir y no puede escudarse en argumentos errados para omitir el cumplimiento del reconocimiento y pago del auxilio económico derivado de incapacidades o licencias de maternidad o paternidad por ley está obligado a cumplir.

De otra parte, como producto del análisis de la información que conforma el cuaderno administrativo, así como de las respuestas remitida por la dependencia de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional Cali, en la cual adjunta, un archivo en Excel contentivo de la relación de las incapacidades depuradas con los datos de nómina y el archivo físico de la seccional, se establece que se recibió el pago de la incapacidad del señor Jaime Enrique Ruiz García identificado con cédula de ciudadanía 79.882.486 del periodo comprendido entre el 13 y el 25 de junio de 2019, por valor de \$307.482, razón por la cual dicho registro se debe deducir del listado de las incapacidades a recobrar por el tiempo comprendido entre noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

En ese orden de ideas, a continuación se enlistan las incapacidades pendientes de pago indicando el nombre del afiliado, su identificación, el periodo y el valor de la prestación económica adeudada por cada una de ellas:

Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Inc	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor Pendiente incapacidad	Valor Pagado	Valor Pendiente	Centro de Costo
30347102	Gaitán Obando	María Olinda	IGE	6/03/2019	4/04/2019	122.020		122.020	8
31525422	Pérez Ortiz	Myriam	IGE	11/02/2019	12/03/2019	484.169		484.169	8
31525422	Pérez Ortiz	Myriam	IGE	11/06/2019	10/07/2019	93.656		93.656	8
38859320	Daraviña Aguirre	Amelvy	IGE	11/08/2019	30/08/2019	3.903.812		3.903.812	8
38859320	Daraviña Aguirre	Amelvy	IGE	31/08/2019	20/09/2019	92.160		92.160	8
38859320	Daraviña Aguirre	Amelvy	IGE	12/07/2019	10/08/2019	122.879		122.879	8
16705055	Rodriguez Salcedo	Jose Reinaldo	IGE	24/06/2019	27/06/2019	4.476		4.476	8
1113632907	Arango Castro	Lady Joana	IGE	2/10/2019	4/10/2019	85.690		85.690	8

Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Inc	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor Pendiente incapacidad	Valor Pagado	Valor Pendiente	Centro de Costo
67045555	Giraldo Cardoza	Karla Tatiana	LMA	18/01/2019	19/06/2019	557.609		557.609	8
1094886189	Valencia Serna	Andres Felipe	IGE	29/08/2019	3/09/2019	871.966		871.966	8
66908722	Vernaza Díaz	Mónica María	IGE	17/09/2019	1/10/2019	25.184		25.184	8
66908722	Vernaza Díaz	Mónica María	IGE	19/07/2019	18/08/2019	152.835		152.835	8
66908722	Vernaza Díaz	Mónica María	IGE	19/08/2019	16/09/2019	23.182		23.182	8
31476338	Arbeláez Valdés	Beatriz Eugenia	IGE	13/11/2019	15/11/2019	85.690		85.690	8
1010189298	Rodriguez Rojas	María Alejandra	IGE	6/09/2019	11/09/2019	285.299		285.299	8
28542226	Sánchez Villanueva	Yenny	IGE	20/03/2019	17/04/2019	1.751.696		1.751.696	8
28542226	Sánchez Villanueva	Yenny	IGE	18/04/2019	30/04/2019	843.409		843.409	8
1014226826	Ortega Higuera	Carlos Arturo	IGE	8/02/2019	22/02/2019	18.955		18.955	8
66949894	Silva Barreiro	Aura Maritza	IGE	26/06/2019	30/06/2019	9.616		9.616	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	5/03/2019	8/03/2019	232.401		232.401	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	20/03/2019	3/04/2019	1.743.009		1.743.009	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	26/10/2019	9/11/2019	1.786.475		1.786.475	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	10/11/2019	9/12/2019	3.572.951		3.572.951	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	10/12/2019	8/01/2020	3.126.332		3.126.332	8
66709879	Montaño Castañeda	María Sulay	IGE	3/02/2019	5/02/2019	1.458		1.458	8
31984649	Osorio Mina	Ana Cecilia	IGE	26/09/2019	30/09/2019	133.052		133.052	8
34554637	Londoño Forero	Mónica	IGE	4/09/2019	6/09/2019	252.460		252.460	8
1136059312	Ñañez Cucuñame	Jeniffer	IGE	23/07/2019	7/08/2019	2.020.628		2.020.628	8
1065004066	Esquivia Petro	Kellys Sofia	IGE	11/02/2019	12/02/2019	125.144		125.144	8
1065004066	Esquivia Petro	Kellys Sofia	IGE	15/02/2019	15/02/2019	807		807	8
31935256	Armendariz Medina	Amira	IGE	19/11/2018	23/11/2018	251.778		251.778	8
94474798	Zapata Libreros	Cristhiam Pavell	IGE	19/06/2019	21/06/2019	5.991		5.991	8
31942486	Reyes Romero	Adriana María	IGE	15/01/2019	11/03/2019	4.392.377		4.392.377	8



Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Inc	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor Pendiente incapacidad	Valor Pagado	Valor Pendiente	Centro de Costo
43207313	Hoyos Correa	Ángela María	IGE	18/07/2019	6/08/2019	492.698		492.698	8
79882486	Ruiz García	Jaime Enrique	LMA	13/06/2019	25/06/2019	307.482	307.482	-	2
79882486	Ruiz García	Jaime Enrique	IGE	12/08/2019	16/08/2019	364.251		364.251	2
16584331	Clavijo Cortes	Henry	IGE	15/03/2019	15/03/2019	238.978		238.978	8
20688199	Camacho Bonilla	Ángela María	IGE	8/02/2019	11/02/2019	882		882	8
1144064796	Ríos Manzano	Andres Felipe	IGE	5/10/2019	8/10/2019	59.730		59.730	8

TOTAL	28.643.187	307.482	28.335.705
-------	------------	---------	------------

Así las cosas, en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 345 y 352 de la Constitución Política y conforme al ordenamiento legal antes relacionado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales están obligadas, como ordenadoras del gasto y responsables de la correcta ejecución del presupuesto de la Rama Judicial, tal como se ha reiterado a lo largo del escrito, a recobrar de las incapacidades, licencias de maternidad o paternidad; proceder de otra manera se estaría omitiendo un deber legal.

Por lo anterior, este despacho procederá a revocar parcialmente los actos administrativos objeto de impugnación y en el sentido de establecer que EPS SURA debe pagar la suma de veintiocho millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos m/l (\$28.335.705) a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en la cuenta destinada para el recaudo de dicha obligación, la cual será suministrada en la diligencia de notificación de esta resolución.

En mérito de lo anterior,

#### RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar parcialmente las Resoluciones DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021 y DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021 expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en el sentido de establecer que la deuda real a pagar por parte de la EPS SURAMERICANA S.A. sigla EPS SURA con Nit 800088702-2, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, es por la suma de **veintiocho millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos m/l (\$28.335.705)** por el recobro de las incapacidades otorgadas a los servidores judiciales afiliados a dicha EPS por el periodo comprendido entre el noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a EPS SURAMERICANA S.A. - EPS SURA efectuar el pago de la obligación contenida en el anterior artículo, dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria. Se advierte que, de no allegar la constancia de pago dentro del término otorgado, se trasladará a la dependencia de cobro coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, para que inicie el proceso de cobro por el procedimiento coactivo, y se liquidarán los respectivos intereses moratorios.

ARTICULO TERCERO. Reconocer personería jurídica al doctor Gustavo Alberto Herrera Avila identificado con cédula de ciudadanía 19.395.114 de Bogotá y tarjeta profesional n° 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder otorgado.

ARTICULO CUARTO. Notifíquese la presente resolución a EPS SURAMERICANA S.A. - EPS SURA en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, indicándole que contra esta no procede recurso alguno y así queda agotado el trámite administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. Comisionese a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, para que efectúe la notificación y para tal efecto envíese el expediente con los antecedentes administrativos, en archivo PDF, y una vez surtido dicho trámite disponga la devolución de la constancia de la notificación a esta Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.,



NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA

Elaboró: Claudia Alexandra Briceño Mejía – Profesional Universitario

Revisó: Raúl Silva Marta – Director Administrativo División de Bienestar y Seguridad Social